

## EL RINCÓN DE LA ACADEMIA

Durante el siglo XIX en Colombia y otros países hispanoamericanos la expansión de las formas de sociabilidad estuvo íntimamente relacionada con las disputas por el control hegemónico del espacio público.

Los principales agentes de las prácticas asociativas fueron las élites liberales, la Iglesia católica con sus aliados conservadores y los sectores populares liderados por grupos de artesanos. Esos agentes imprimieron un matiz político-religioso en el conflicto por la

definición del Estado-Nación.

Este libro, *Sociabilidad, religión y política en la definición de la Nación*, de la Universidad del Externado, escrito por **Gilberto Loaiza Cano**, versión parcial de una tesis de doctorado que recibió la mención Summa Cum Laude en 2006, es un examen exhaustivo de la evolución de las principales formas de sociabilidad desde los inicios republicanos (1820) hasta la integración de la república católica, mejor conocido como la Regeneración (1886).

## Una página de prensa es suficiente...

RODRIGO UPRIMNY\*



EL MARTES PASADO, EL PRESIDENTE santos anunció que recortaría el mandato en nuestro país de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con el argumento de que Colombia “ha avanzado lo suficiente” para no necesitar “más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas”. Pero una sola página de la prensa matutina de ese martes era suficiente para contradecir ese diagnóstico presidencial. En efecto, la página 6 de la edición impresa de este diario divulgó ese día dos noticias muy preocupantes.

Primero, supimos que había sido asesinado José Segundo Turizo, un líder que impulsaba la restitución de tierras en el Magdalena Medio. Con su muerte, el número de reclamantes de tierras asesinadas supera los 70 y prácticamente todos los crímenes están en la impunidad. Y esos asesinatos no sólo han provocado un terrible sufrimiento, sino que han puesto en riesgo el éxito del programa bandera del Gobierno en derechos humanos: la restitución de tierras.

Segundo, el periódico informaba de un reciente fallo de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, que trasladó a la justicia militar el caso del teniente coronel Carlos Suárez, investigado por falsos positivos. La razón de ese traslado: la aplicación de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno y que fue aprobada el año pasado, la cual amplió considerablemente el fuero militar. Existe entonces el riesgo de que, por esa reforma constitucional, todos los falsos positivos vayan a la justicia militar y queden en la impunidad, a pesar de que el Gobierno dijo que eso nunca iba a ocurrir.

Esos dos hechos, entre otros, muestran que, por razones distintas, en Colombia subsisten problemas de derechos humanos muy graves.

En el primer caso, el problema es de incapacidad estatal, pues las autoridades no han podido ni sabido proteger adecuadamente a los reclamantes de tierras. En el segundo, el problema es de visión, pues el Gobierno impulsó voluntariamente una reforma constitucional regresiva en derechos humanos, como fue la ampliación del fuero militar. Ambos casos, por razones distintas, justifican entonces la presencia en Colombia de la OACNUDH, ya que ese organismo tiene, entre otras cosas, funciones tanto de asistencia técnica como de monitoreo.

Ahora bien, la asistencia técnica internacional es útil para intentar superar incapacidades estatales, como las que existen en la protección de los reclamantes de tierras. Por su parte, el monitoreo llama la atención para prevenir o sancionar actos o medidas violatorias de los derechos, como lo fue la desafortunada ampliación del fuero militar. Fue en parte gracias a los informes anuales de la OACNUDH que los colombianos nos enteramos de la magnitud y gravedad de los falsos positivos. ¿Por qué entonces rechazar estos apoyos y controles?

Es contradictorio que este Gobierno, que dice estar comprometido con los derechos humanos, haya tomado esta decisión de acortar el periodo de la OACNUDH.

\* Director Dejusticia y profesor Universidad Nacional.

## Rasgos y Rasguños

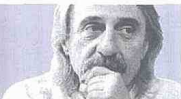
## Por Osuna



Así va La Habana

## En las goteras

ALFREDO MOLANO BRAVO



**LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA** —tan vilipendiadas por los militares, terratenientes y gamonales— surgen como una forma de resolver el problema de la tierra en regiones de colonización afectadas por la violencia. O, dicho de otra forma, de defender la propiedad privada campesina de la voracidad de los ganaderos. El Estado adoptó esa figura con este objetivo al considerar que el despojo de tierras era una de las causas de la violencia. Y es que nadie puede negar la relación histórica entre la tierra y la guerra. Los colonos del sur de Meta habían invadido el Parque Natural de la Macarena porque ahí adentro podían trabajar sin miedo a que el negociante de tierras viniera a quitarles o a comprarles las mejoras. La razón era práctica: a ningún hacendado le interesa la tierra sin título. En cierta medida lo que el Estado buscaba era desactivar el conflicto armado y, al mismo tiempo, crear un cinturón protector de los parques nacionales para impedir su invasión. Al colono se le decía: “Sálgame del parque y trabaje en esos baldíos alejados”. El colono respondía: “Nada saco porque en cinco años los terratenientes me sa-

can”. “No —reviraba el ministro de Agricultura, doctor José Antonio Ocampo—, no pueden sacarlo porque los ganaderos no pueden comprar mejoras ahí”. Con estos mismos argumentos, los colonos y campesinos están pidiendo que sus pequeñas propiedades, hechas a pulso, les sean respetadas y defendidas por la tan mentada institucionalidad. Traducción para los Pepes: los labriegos, como los llaman, quieren salirse de la guerra por la tierra y no meterse a los parques, ni a los resguardos, ni a los territorios negros, ni invadir las haciendas ni los predios urbanos. Bien vistas las cosas, las ZRC son una medida de ordenamiento territorial y además una ley para proteger la propiedad privada hecha a pulso, que “merece especial protección”.

Es la figura legal que están defendiendo los campesinos del Catatumbo y del Sumapaz. Petro, en las goteras de Bogotá, quiere que el Estado proteja el páramo de Sumapaz —la fábrica de agua más grande del país— y proteja al mismo tiempo al campesinado de la región, envuelto en el problema agrario desde los años 30. Se garantizaría comida barata y agua limpia para la capital. Uribe —que está deschavetado del todo— grita que esa zona de reserva sería una avanzada del terrorismo en Bogotá, y el ministro de Defensa —cada vez más parecido a Manolito, el personaje de Quino— les advierte al alcalde y a su secretario de Gobierno: “No se metan ahí porque les

cortamos las manos; déjenlos arreglar las demandas campesinas a nuestra manera: a bala”. Las reacciones de Uribe y del ministro de Defensa frente a la idea de Petro son la muestra más evidente de que a esa figura legal se oponen las Fuerzas Militares. ¿Por qué a los generales no les gustan las ZRC? Porque ellas atentan contra su oficio, porque pueden ayudar a resolver el problema del orden público. ¿Por qué a los grandes ganaderos no les gustan las ZRC? Porque les quitan de las manos unas tierras a las que les tienen echado el ojo. Más claro no canta un gallo. He defendido las ZRC desde su creación. Y me parece muy valiente Petro al meterse a pedirle al Gobierno que cumpla la Ley 160 del 94, que tiene tan preocupados a Pepe Lafaurie y a Fedegán, como tuvo preocupados la Ley 200 del 36 a Laureano Gómez y a la APEN. Ojalá los de ahora no les vaya a dar por hacer lo mismo que hicieron los terratenientes en el Sumapaz, en el Tequendama y en el sur del Tolima en los años 40 y 50.

**PUNTO Y COMA:** Con la misma fuerza con que defiende el derecho de los campesinos a su tierra, defendiendo el derecho a ver los toros. La prohibición de las corridas que Petro decretó me parece tan arbitraria como el despojo de tierras, porque es también el despojo de un bien cultural al que tiene derecho un sector de la población, así sea una minoría.